

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL
MAGISTRADA PONENTE: MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA

PROCESO	ORDINARIO APELACIÓN AUTO
DEMANDANTE	WILLIAM GONZÁLEZ GONZÁLEZ
DEMANDADOS	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP– EPM y COLPENSIONES
RADICADO	05001-31-05-021-2021-00158-01
ORIGEN	JUZGADO VEINTIUNO LABORAL DEL CTO DE MEDELLÍN
TEMAS Y SUBTEMAS	NULIDAD PROCESAL – Debido proceso Art. 29 CN
DECISIÓN	REVOCA

AUTO INTERLOCUTORIO No.179

Medellín, treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

En atención a lo previsto en el decreto 806 de 2020 convertido en legislación permanente a través de la Ley 2213 de 2022, una vez discutido y aprobado el presente asunto en la SALA TERCERA DE DECISION LABORAL, según consta en Acta N°018 de 2022, se procede a dictar AUTO INTERLOCUTORIO en orden a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del **DEMANDANTE**, contra el Auto Interlocutorio del 2 de marzo de 2023, proferido por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso de la referencia.

ANTECEDENTES

El señor **WILLIAM GONZÁLEZ GONZÁLEZ** presentó demanda ordinaria laboral en contra de **EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP – EPM y COLPENSIONES** con el fin de que: **1)** Se declare que **EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN – EPM ESP** tenía la obligación de realizar cotizaciones al sistema de pensiones en su favor, aún después de cumplir los requisitos mínimos para acceder a la pensión de vejez. **2)** En ese sentido, pidió declarar que la demandada dejó de cotizar en su nombre desde el 1 de mayo de 2008 hasta el 1 de septiembre de 2014. **3)** En consecuencia, solicitó condenar a **EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN – EPM ESP** le cancele a **COLPENSIONES** los aportes dejados de efectuar en su favor desde el 1 de mayo de 2008 hasta el 1 de septiembre de 2014, con los respectivos intereses moratorios. **4)** Así mismo, solicitó condenar a la citada entidad al pago de la indemnización moratoria contenida en el artículo 65 CST, derivada de la omisión en el pago de los aportes a pensión durante la vigencia de su vinculación a esta demandada.

Notificadas las entidades accionadas, el Juzgado emitió Auto No. 146 del 17 de abril de 2022, en el cual admitió la contestación proveniente de **COLPENSIONES**, y tuvo por no contestada la demanda por parte de **EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP – EPM** (Archivos 09, 13 y 15 ED).

PROVIDENCIA APELADA

En curso de la audiencia reglada en el artículo 77 CPLSS realizada el 2 de marzo de 2022, durante la etapa de saneamiento de proceso, el Juzgado evidenció una anomalía en punto a la notificación de la demandada **EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP – EPM**, lo que dio lugar a que se tuviera por no contestada la demanda de parte de esta accionada: Es así como, previo a la diligencia, la apoderada de esta entidad allegó los certificados con los cuales demostraba que sí se dio el correspondiente pronunciamiento por esta accionada, constatando el juzgado que tal actuación fue enviada al correo del Despacho el 8 de julio de 2021, sin que se hubiere sido incorporada al expediente digital.

En ese sentido expuso que, acreditándose por parte del demandante que la notificación a la citada entidad fue agotada el 18 de junio de 2021, debía aclarar que en principio podría considerar que el término de traslado sería de doce (12) días; sin embargo, resaltó que no podía perderse de vista que el CPLSS contempla en su artículo 41 un término adicional de cinco (5) días para efectos de la contestación de la demanda cuando se trata de entidades públicas, ambigüedad que debe ser resuelta en virtud de la favorabilidad y confianza legítima, pues, ante la existencia del término fijado en su momento por el Decreto 806 de 2020 y la norma procesal laboral, debía también tomarse esta última, precisando entonces que el término total para contestar el gestor en este caso sería de quince (15) días, adicionales a los dos (2) descritos en el decreto.

En consecuencia, coligió que efectivamente **EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP – EPM** contestó la demanda oportunamente, debiendo sanearse el proceso en ese sentido.

En contra de la anterior decisión el apoderado de la PARTE DEMANDANTE interpuso reposición aludiendo que, pese a lo indicado por el Despacho, la notificación a la accionada se efectuó en virtud del Decreto 806 de 2020, que autorizaba realizar la actuación por medios electrónicos, misma que se entendía surtida dos (2) días después de haberse acusado el recibido del correo electrónico. Así mismo arguyó que, al momento de presentar la demanda, se envió copia de esta al correo de la entidad, con lo que se tiene que, al haber notificado el auto admisorio el 18 de junio de 2021, la empresa tenía hasta el 7 de julio de ese año, y al haber contestado justo al día siguiente, su pronunciamiento deviene en extemporáneo.

Además refirió que, los términos de las actuaciones son preclusivos, y en ese orden de ideas, una vez dispuso tener por no contestada la demanda, la pasiva no interpuso los recursos que procedían contra esa decisión, a lo que se suma que, preguntándosele a la apoderada de aquella, si había una situación que debiera corregirse, expuso que no observaba ninguna, razones a partir de las cuales consideró que la decisión del Juzgado atenta contra el debido proceso, en tanto insistió, dio aplicación a una norma distinta a la que realmente procedía, agregando que sobre las disposiciones procesales no cabe la favorabilidad.

Al decidir sobre la inconformidad de la parte, el Juzgado se atuvo a lo considerado para tener por contestada la demanda, negando la reposición propuesta, en la medida en que procedía dar esta garantía a la entidad accionada, por encima de la disparidad de criterio con la parte recurrente.

Frente a lo anterior, el mandatario del DEMANDANTE invocó la existencia de nulidad procesal por violación al debido proceso, tras reiterar, en esencia, lo argüido en la sustentación de la reposición contra la decisión de sanear el proceso, en los términos descritos, añadiendo precisamente que lo decidido por el Juzgado se fundamentó en el párrafo del artículo 41 CPLSS, entendiendo que, una vez efectuada la notificación por correo electrónico, la entidad contaba con quince (15) días para contestar, interpretación equivocada porque, primero, la norma en cita, a su juicio, regula una notificación especial, y

segundo, la entidad en comento fue noticiada en virtud de lo establecido en el Decreto 806 de 2020.

Al decidir sobre tales argumentos, el Juzgado de primer grado concluyó que no tenía cabida la nulidad propuesta, porque si bien la Jurisprudencia Constitucional ha considerado la posibilidad de anular el proceso adelantado por vulneración al debido proceso, también es cierto que el mismo artículo 133 CGP ha reglado que las irregularidades no contenidas allí pueden ser saneadas a través de los demás mecanismos reglados en la legislación.

En ese contexto expuso que, al haber manifestado en un primer momento que procedía a interponer recurso de reposición, la presunta nulidad invocada quedó saneada al resolverse el recurso de reposición, citando lo establecido en los artículos 135 y 136 CGP, ya que la oportunidad para alegar la irregularidad se produjo al momento en que el Juzgado decidió sanear el proceso, lo que hace improcedente su estudio (Archivos 18 y 19 ED).

RECURSO DE APELACIÓN

En contra de la anterior determinación, el extremo demandante presentó recurso de apelación, sustentado en que, si bien el Juzgado dispuso no resolver sobre la nulidad propuesta, lo claro es que, ante la decisión del saneamiento asumida por aquel, la parte interpuso el único recurso que cabía (reposición), y una vez resuelto este, interpuso la nulidad descrita, en tanto fue allí cuando el Juez deja en firme su decisión, la cual debe ser resuelta de fondo, como quiera que, haciendo una interpretación equivocada de la norma aplicable, le concedió un término más amplio a la demandada para pronunciarse al respecto (Archivos 18 y 19 ED).

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Mediante auto del 19 de mayo de 2023, se dispuso el traslado para alegatos a las partes, sin embargo, las partes omitieron pronunciarse al respecto.

PROBLEMA (S) A RESOLVER

El problema jurídico se centra en establecer si es procedente declarar la nulidad del Auto a través del cual el Juzgado de primer grado estimó plausible sanear el proceso, y tener por contestada la demanda por parte de **EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP – EPM**, ello por cuanto al tenor de lo alegado por la PARTE DEMANDANTE, tal actuación no resulta válida, por sustentarse en una norma que no era aplicable para el término de contestación, y por estar en firme la decisión primigenia que tuvo por no contestada la demanda, sin que se interpusiera por la accionada ningún recurso frente a esta, lo que en su sentir, comporta una violación al debido proceso de la PARTE DEMANDANTE.

CONSIDERACIONES

Sea lo primero reseñar que en atención a lo reglado en el numeral 6º del artículo 65 del CPTSS, según el cual el auto que decida sobre nulidades procesales es susceptible del recurso de apelación, esta Sala de Decisión es competente para dirimir el presente asunto, para lo cual, se seguirán los lineamientos trazados por el artículo 66A del CPTSS, es decir, ciñéndose a lo que es motivo de la impugnación.

Para desatar esta controversia, huelga recordar que, como el estatuto procesal del trabajo no contempla dentro de su articulado el régimen de nulidades, es necesario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 del CPTSS, acudir a al Código General del Proceso, norma que consagra puntualmente las causales configurativas de esta en su artículo 133. Dicho régimen de nulidades se forja como instrumento encaminado, principalmente, a materializar prerrogativas como el debido proceso y el derecho de defensa, atendiendo, entre otros, al principio de especificidad.

Debido a este último aspecto, se ha dado suma relevancia a la característica taxativa que envuelve este remedio procedimental, destinado como se dijo, a enderezar ciertos vicios procesales generados en el curso del litigio, y excepcionalmente después de dictarse sentencia, si ocurriere en ella, encontrando norma regulatoria de la oportunidad para su interposición, y la forma en que opera su saneamiento.

Desde esa órbita anota la Sala, para que haya lugar a la declaratoria de alguna causal de nulidad, debe respetarse la noción de *taxatividad* que las envuelve, y solo pueden ser alegadas con base en hechos y motivos previa y expresamente contemplados en el artículo 133 CGP. No obstante, es imperioso destacar que de tiempo atrás la Jurisprudencia tanto Constitucional como Laboral, ha sido condescendiente con el acontecer del debate procesal, entendiendo la existencia de situaciones que, si bien escapan del relato expreso de los supuestos fácticos contenidos en la lista de causales de nulidad regladas hoy en la legislación, constituyen una afrenta a la garantía del debido proceso para alguna de las partes, que necesariamente debe remediarse.

A partir de esta consideración, ha tenido desarrollo la denominada nulidad constitucional por violación al debido proceso, por ejemplo, en la Sentencia T-330 de 2018 en la que se dijo:

*“(…) En primer lugar, es importante examinar si se trata de una irregularidad menor que no afecta el debido proceso. (...) **Según esta consideración, se está ante una ilegalidad que compromete el debido proceso, bien sea cuando se han afectado las reglas sustantivas que protegen la integridad del sistema judicial o que buscan impedir que se tomen decisiones arbitrarias** (…).*

(…)

*es necesario considerar el alcance del concepto de debido proceso al cual alude la norma constitucional, esto es, si se refiere exclusivamente a las reglas procesales o si también incluye las que regulan la limitación de cualquier derecho fundamental, como la intimidad, el secreto profesional y la libertad de conciencia. **En Colombia, se ha dicho que el concepto de debido proceso es sustancial, esto es, comprende las formalidades y etapas que garantizan la efectividad de los derechos de las personas y las protegen de la arbitrariedad de las autoridades, tanto en el desarrollo de un proceso judicial o administrativo como, además, frente a cualquier actuación que implique la afectación de derechos constitucionales fundamentales.** (…)*”

De ahí que el precedente mencionado plantea la necesidad de efectuar el análisis particular de cada caso, en el cual la decisión de rechazar la solicitud de nulidad por no estar ajustada a ninguna de las establecidas en el artículo 133 CGP, puede, según el caso, configurar una actuación ciertamente lesiva al derecho sustancial, atentatoria igualmente contra el debido proceso, erigiéndose, incluso como un exceso ritual manifiesto. Así lo precisó cuándo anotó: *“(…) En el caso concreto la omisión de tener en cuenta la prueba mencionada por cuanto no se ajustaba a ninguna de las causales consagradas en el artículo 133 del Código General del Proceso, se traduce en un claro exceso ritual manifiesto que lesiona los preceptos constitucionales que garantizan el debido proceso y la prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones judiciales. (…)*”.

En concordancia con lo anterior, la Sala de Casación Laboral también ha aceptado, que, a la par de los motivos de nulidad nominados en la norma adjetiva, se invoque la nulidad “constitucional” por transgresión del artículo 29 superior, según lo dio a entender en Auto AL4032-2022: *“(…) De ahí, que las que dan lugar a su declaratoria son taxativas y solo pueden alegarse por los hechos y motivos previa y expresamente contemplados en el artículo 133 del CGP, aplicable a los asuntos laborales por expresa remisión del artículo 145 del CPTSS y, **adicionalmente, puede invocarse la nulidad constitucional prevista en el artículo 29 superior, por violación al debido proceso.** (…)*”.

Pese a lo anterior, también es imperativo revisar los principios que rigen el régimen de nulidades, destacándose entre estos, el de **trascendencia**, bajo el cual la doctrina ha considerado que no basta con la existencia de una irregularidad, sino que pasa a ser

indispensable que el vicio advertido transgreda el *debido proceso* de la contraparte, que en últimas es el objetivo proteccionista por el que propende la institución de la nulidad, iterándose, que no es suficiente para dejar sin efectos determinada actuación, el simple dislate formal para desencadenar en motivo de anulación.

De esa forma lo ha recabado la Sala de Casación Civil de la CSJ, citándose a manera de ejemplo la Sentencia SC15413-2015:

*“(…) La nulidad surge como uno de los principales mecanismos que procura la salvaguarda de las formas propias del juicio, **siempre que afecten de modo importante la eficiencia del mismo**, por estar concebida excepcionalmente para aquellos casos en que el vicio no pueda corregirse de otra manera por no alcanzar el acto su finalidad.*

(…)

*Las nulidades procesales son de interpretación restringida y no admiten analogía. Se orientan bajo los principios de especificidad, según el cual aquellas no se producen si no hay norma que expresamente la consagre, el principio de protección, es decir que mientras no se declare una nulidad, el acto se considera válido y surte plenos efectos, el de disponibilidad que permite su renuncia, el de lealtad procesal que obliga a las partes a reclamarla inmediatamente la hayan observado, el de preclusión porque si la parte interesada no alega el vicio en su momento, pierde la oportunidad de hacerlo y el de **trascendencia, referido a la necesidad de que la irregularidad reclamada para que opere debe causar un perjuicio a la parte que la alega.** (…)”.*

Bajo tal panorama, en el particular, la discusión gira en torno a la posible transgresión al debido proceso atribuida al Juez de primer grado, al tener por contestada de **EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP – EPM**, actuación con la cual, aseguró el apelante, se transgrede el debido proceso, como quiera que la notificación seguía la línea legal consagrada en el Decreto 806 de 2020, y no lo contemplado en el artículo 41 CPLSS.

Al resolver la petición anulatoria, el *A quo* la rechazó, tras argumentar que, si era del interés de la parte formular una petición de nulidad, esta debió interponerse inmediatamente se notificó la decisión a partir de la cual se generó la anomalía procesal endilgada, lo que en su sentir no acaeció en el presente proceso, toda vez que solo fue propuesta luego de desatar el recurso de reposición impetrado en contra de la citada determinación, a lo que se opuso el mandatario de la parte accionante, insistiendo en la ocurrencia de una irregularidad que violenta el derecho al debido proceso de su representado.

Puestas de ese modo las cosas, independiente que la Sala comparta o no los argumentos que llevaron al Juzgado a abstenerse de resolver la nulidad propuesta por la parte actora, lo cierto es que, si se da una mirada de fondo a las determinaciones asumidas por el *A quo*, emerge que lo esbozado en la alzada merece ser objeto de análisis de cara a verificar la configuración de una irregularidad al interior del trámite procesal adelantado en el *sub-lite*.

Frente a ello, debe recordarse que el modelo de notificación conocido en Colombia, implantado por los estatutos procesales, a saber, Código General del Proceso y Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, para el caso que nos ocupa, a raíz de la pandemia generada por el COVID-19 sufrió modificaciones que iban a ser temporales inicialmente, dado que el Gobierno Nacional el 06 de junio de 2020 con el propósito de agilizar los trámites judiciales y flexibilizar la atención de los usuarios a la administración de justicia, expidió el Decreto 806, buscando fortalecer el uso de las tecnologías de la información en el trámite judicial, trámite que con algunas modificaciones, pasó a ser legislación permanente a través de la Ley 2213 de 2022.

Justamente, el artículo 8 del citado Decreto estableció que *“(…) las notificaciones que deban hacerse personalmente también podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación, sin necesidad del envío de previa citación o*

aviso físico o virtual (...) La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación. (...)”.

De esta manera, las formas de notificación contempladas en los artículos 29 y 41 CPLSS, en concordancia con los artículos 291 y 292 CGP, deben acompañarse con lo establecido en el Decreto 806 de 2020, **normativa que priorizó la virtualidad**, indicando que, sólo en casos excepcionales se impondría la presencialidad; notificación que superó el examen de constitucionalidad realizado por la Guardiania de la Carta Magna según lo expuso en la C-420 de 2020.

Así entonces, la inquietud que suscita la situación planteada gira en torno al alcance del parágrafo del artículo 41 CPLSS, en orden a dilucidar si aplica también para el evento de la notificación personal por medios electrónicos, que se autorizó en esta jurisdicción ordinaria laboral con el decreto 806 de 2020, o se debe circunscribir a los casos en que se opte por la notificación física a estas entidades.

En ese sentido, desde ya se anota que la tesis que sostendrá esta Sala apunta a que el procedimiento previsto en el citado parágrafo, que hace relación al caso en que no se pudiese recibir la notificación por el representante legal de la entidad pública, **se aplica a los eventos de notificación por medios físicos, y no así, para aquellos en los cuales se acuda a la notificación por medios electrónicos**, con base en las siguientes consideraciones.

Para el efecto, se tiene que la norma en comento precisa que:

“(…) PARÁGRAFO. NOTIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS. Cuando en un proceso intervengan Entidades Públicas, el auto admisorio de la demanda se debe notificar personalmente a sus representantes legales o a quien éstos hayan delegado la facultad de recibir notificaciones.

Sin embargo, si la persona a quien deba hacerse la notificación, o su delegado, no se encontrare o no pudiese, por cualquier motivo recibir la notificación, ésta se practicará mediante entrega que el notificador haga al secretario general de la entidad o en la oficina receptora de correspondencia, de la copia auténtica de la demanda, del auto admisorio y del aviso.

En los asuntos del orden nacional que se tramiten en lugar diferente al de la sede de la entidad demandada, la notificación a los representantes legales debe hacerse por conducto del correspondiente funcionario de mayor categoría de la entidad demandada que desempeñe funciones a nivel seccional, quien deberá al día siguiente al de la notificación, comunicarle lo ocurrido al representante de la entidad. El incumplimiento de esta disposición constituye falta disciplinaria.

Para todos los efectos legales, cuando la notificación se efectúe de conformidad con lo dispuesto en los dos incisos anteriores, se entenderá surtida después de cinco (5) días de la fecha de la correspondiente diligencia. (...)”. (Subraya y Negrilla de la Sala).

Bajo ese entendido, nótese que, de la interpretación gramatical de la norma en cita se extrae que, el término de cinco (5) días siguientes a la fecha de la correspondiente diligencia, ocurre en el supuesto de los **dos incisos anteriores**, que no es otro que el escenario en el cual no se puede entregar la correspondencia al representante legal de la entidad pública.

De ahí que, fluye para la Colegiatura que, de los apartes resaltados del dispositivo en cuestión puede extractarse, que estos tienen un ámbito de aplicación **propio del ambiente físico - en oposición a los medios electrónicos de notificación -, y se encuentra encaminado a garantizarle al ente demandado, en atención a la complejidad de sus estructuras y encargos, que la recepción de la notificación se dé por el responsable de asumir la representación de la entidad ante la autoridad judicial**; situación en la cual se prevé un término prudencial que se estima en cinco (5) días.

Empero, esta situación, resalta la Sala, no es la que acontece para el ámbito de **notificación por medios electrónicos a las entidades públicas**, con el cual quedan superadas las dificultades que se avizoraban en el proceso de notificación por medios físicos, tal como lo tiene asimilado de tiempo atrás, por citar un ejemplo, la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la que, al igual como acontecía en el procedimiento laboral, contemplaba en antaño – en el anterior Código de lo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984) -, que la notificación para las entidades públicas, se configurada dentro de los cinco (5) días siguientes a la correspondiente diligencia de entrega del auto admisorio y anexos de la demanda en la dependencia señalada para el efecto.

Esta situación fue superada en la citada Jurisdicción, al imponer la notificación por medios electrónicos, a partir de las modificaciones introducidas con el decreto ley 1437 de 2011, con lo cual se itera, se entendió que la situación de “*entramamiento*” para la notificación personal de las entidades públicas quedaba corregida con la notificación por medios electrónicos, fijando así que la notificación se surte a partir del segundo día del envío del auto y sus anexos por medios electrónicos, y que el traslado correría a partir del día siguiente.

En efecto, encontrábamos en el antiguo Código Contencioso Administrativo, Decreto 01 de 1984, artículo 150 (modificado por el 23 de la ley 446 de 1998), con respecto a la notificación del auto admisorio de la demanda a los representantes legales de las entidades públicas y privadas que ejerzan funciones públicas, con el siguiente contenido:

“(…) Artículo 150. Notificación del auto admisorio de la demanda Las entidades públicas y las privadas que ejerzan funciones públicas son partes en todos los procesos contencioso administrativos que se adelanten contra ellas o contra los actos que expidan. Por consiguiente, el auto admisorio de la demanda se debe notificar personalmente a sus representantes legales o a quien éstos hayan delegado la facultad de recibir notificaciones. Sin embargo, si la persona a quien deba hacerse la notificación, o su delegado, no se encontrare o no pudiese, por cualquier motivo, recibir la notificación, ésta se practicará mediante entrega que el notificador haga al empleado que lo reciba de copia auténtica de la demanda y del auto admisorio y de aviso que enviará, por el mismo conducto, al notificado.

En los asuntos del orden nacional que se tramiten en Tribunal distinto al de Cundinamarca, la notificación a los representantes legales debe hacerse por conducto del correspondiente funcionario de mayor categoría de la entidad demandada que desempeñe funciones a nivel seccional o, en su defecto, por medio del Gobernador, Intendente o Comisario, quien deberá, el día siguiente al de la notificación, comunicarla al representante de la entidad. El incumplimiento de esta disposición constituye falta disciplinaria.

Cuando la notificación se efectúe de conformidad a lo dispuesto en el inciso anterior, después de cinco (5) días de la fecha de la correspondiente diligencia, se entenderá surtida para todos los efectos legales, la notificación.

En el expediente se dejará constancia de estos hechos, en diligencia que deberán suscribir el notificador y el empleado que lo reciba. (...)”.

No obstante, se itera, con la implementación del CPACA (Ley 1437 de 2011) se avanzó en este tema, imponiéndose a las autoridades públicas el deber de contar con un buzón de correo electrónico destinado exclusivamente a la recepción de notificaciones judiciales – artículo 197 -, determinando para los efectos de esta ley, entendiéndose como notificaciones personales las surtidas a través del correo electrónico.

Ahora, las modificaciones introducidas por las leyes 2080 de 2021 y 2213 de 2022, el artículo 199 CPACA, en lo atinente a la notificación personal del auto admisorio de la demanda contra entidades públicas, dispuso que este se haría “*a sus representantes legales o a quienes estos hayan delegado la facultad de recibir notificaciones, o directamente a las*

personas naturales, según el caso, y al Ministerio Público, mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para notificaciones judiciales a que se refiere el artículo 197 de este código.”

Seguidamente, en lo que respecta al momento en que se entiende surtida la notificación, se indica en los numerales 3° y 4° del artículo 199 decreto ley 1437 de 2011¹: “(...) *que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda constatar por otro medio el acceso electrónico al mensaje de datos por parte del destinatario (...)*”, y que “(...) **le/l traslado o los términos que conceda el auto notificado solo se empezarán a contabilizar a los dos (2) días hábiles siguientes al del envío del mensaje y el término respectivo empezará a correr a partir del día siguiente (...)**”. A su vez, el numeral 2 del artículo 205 del CPACA², prevé que “(...) *[l]a notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezaran a correr a partir del día siguiente al de la notificación (...)*”.

A su vez, la Ley 2213 de 13 de junio 2022, norma que rige a partir de su promulgación y tiene un carácter complementario “(...) *a las normas contenidas en los códigos procesales propios de cada jurisdicción y especialidad (...)*”³, señala en el inciso 3 del artículo 8 que “(...) *la notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje (...)*”.

De conformidad con lo anterior, puede concluirse que la notificación personal de los autos por **medios electrónicos** se entiende realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje electrónico, y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación.

En ese contexto, al interior del proceso ordinario laboral, el A *quo* plantea para en el caso de las notificaciones de las entidades públicas, la idea de conjugar la notificación electrónica del auto admisorio de la demanda, con la notificación que se realiza por medios físicos, que es para la cual, se itera, amerita otorgar un plazo más amplio, en orden a brindar la oportunidad de que la autoridad responsable de atender la respuesta y defensa técnica del ente público, reciba la respectiva notificación.

Empero, no comparte esta Corporación la comprensión de la norma propuesta en esos términos, puesto que se encuentra que tal procedimiento es requerido, vuelve y se insiste, en el caso en el cual la notificación no se da a través de medios electrónicos, **sino con el envío físico a la oficina de recepción de correspondencia de la entidad pública del respectivo auto admisorio con sus anexos.**

En síntesis para la Sala, la correcta intelección e integración normativa de los dispositivos de las Leyes 2213 de 2022 y Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, lleva a efectuar la respectiva distinción **entre la notificación personal por medios electrónicos y la notificación personal por medio físicos**, determinando que el plazo para entender notificada la decisión y que comience a correr el tiempo para el traslado, en uno y otro caso, aplican de forma diferente, siendo entonces, **para la notificación personal por medios electrónicos**, el establecido en el artículo 8° del Decreto 806 de 2020 (norma aplicable para la época de notificación en el presente proceso – convertido en legislación permanente Ley 2213-2022), esto es, transcurridos dos (2) días después de enviado el

¹ Modificado artículo 48 ley 2080 de 2021.

² Modificado artículo 52 ley 2080 de 2021.

³ Ley 2213 de 2022. Artículo 1o. Objeto. Esta ley tiene por objeto adoptar como legislación permanente las normas contenidas en el Decreto ley 806 de 2020 con el fin de implementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales y agilizar el trámite de los procesos judiciales ante la jurisdicción ordinaria en las especialidades **civil, laboral, familia, jurisdicción de lo contencioso administrativo, jurisdicción constitucional y disciplinaria**, así como las actuaciones de las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales y en los procesos arbitrales.

mensaje de datos y que se tenga la constancia de recibido respectiva, mientras que, para el caso de la **notificación personal a través de medios físicos**, en el caso de las entidades públicas, estaría prevista al tenor de lo estipulado en el parágrafo del artículo 41 CPLSS, a saber, vencidos los cinco (5) días siguientes a la entrega realizada “*al secretario general de la entidad o en la oficina receptora de correspondencia, de la copia auténtica de la demanda, del auto admisorio y del aviso*”.

La postura expuesta en líneas anteriores encuentra apoyo en la forma como se avanzó en la jurisdicción contencioso administrativa en lo relativo a la **notificación personal del auto admisorio de la demanda respecto de las entidades públicas**, que al pasar de un sistema de notificación similar al establecido en el *proceso ordinario laboral*, a disponer la notificación mediante el uso de las tecnologías de la información, entendió que en tal escenario no se hacía necesario otorgar un término adicional para que las entidades recibieran la comunicación sobre la admisión de la demanda, disponiendo el conteo de los términos de notificación y traslado, en idéntico sentido a como lo tiene definido el decreto 806 de 2020, adoptado como legislación permanente a través de la ley 2213 de 2022 (En esos términos lo ha expuesto el Máximo Órgano de lo Contencioso Administrativo, por ejemplo, en Auto de Unificación Rad. 68001-23-33-000-2013-00735-02 (68177) del 29 de noviembre de 2022).

A esta posición tampoco ha sido ajena la Jurisdicción Ordinaria Laboral, pues, la Sala de Casación Laboral de la CSJ, por ejemplo, en Auto AL2957-2020 que resaltó:

“(…) En atención al marco normativo que regula el funcionamiento de la referida entidad, para el asunto que aquí se debate, se advierte que la notificación del auto admisorio de la demanda ordinaria laboral, debe efectuarse según lo dispuesto en las reglas establecidas para las corporaciones públicas.

Por lo visto, el precepto llamado a dilucidar la presente causa es el artículo 41 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social (…).

Sin embargo, aunque la legislación laboral sí reguló en forma expresa el mecanismo de notificación personal, lo cierto es que no previó la forma cómo se haría en un contexto en el que se privilegia el uso de las tecnologías de la información.

Razón por la que en virtud del principio de integración normativa de las normas procedimentales es dable acudir a lo dispuesto en el artículo 612 del Código General del Proceso que refiere que la notificación personal del auto admisorio de la demanda y mandamiento de pago a entidades públicas, se hará mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para notificaciones judiciales a que señala el artículo 197 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Es así como tal disposición establece que las «entidades públicas de todos los niveles, las privadas que cumplan funciones públicas y el Ministerio Público que actúe ante esta jurisdicción, deben tener un buzón de correo electrónico exclusivamente para recibir notificaciones judiciales».

Esta precisión es de especial relevancia en un marco como el actual en el que se itera se favorece el uso de las TIC en los procesos judiciales. En consecuencia, se hace imperativo contar con un buzón de correo electrónico, pues su propósito no es otro que obtener información oportuna y eficaz respecto de las decisiones judiciales con el fin de imprimirles celeridad y salvaguardar los principios de transparencia y publicidad que fortalecen la administración de justicia y su cobertura

Así, lo dispone el artículo 103 del Código General del Proceso que prevé:

En todas las actuaciones judiciales deberá procurarse el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la gestión y trámite de los procesos judiciales, con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la justicia, así como ampliar su cobertura. Las actuaciones judiciales se podrán realizar a través de mensajes de datos. La autoridad judicial deberá contar con mecanismos que permitan generar, archivar y comunicar mensajes de datos.

Lo anterior, guarda armonía con lo estatuido en el artículo 8.º del Decreto 806 de 2020 - declarado exequible condicionado por la Corte Constitucional mediante sentencia C-420 de 24 de septiembre de 2020, en el sentido que los términos allí dispuestos empiezan a contarse cuando el iniciador acuse el recibo o se pueda por otro medio, constatar el acceso del destinatario al mensaje-, normativa que si bien no es aplicable al asunto dada la fecha en que el proceso se interpuso, lo cierto es que adopta medidas para implementar dichas tecnologías en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos y flexibilizar la atención a los usuarios de servicio de la justicia, en el marco de la emergencia económica, social y ecológica en el territorio nacional. Mecanismos que, de todos modos, ya contemplaba el Código General del Proceso, como quedó visto en precedencia. (...)”.

Así entonces, como en el particular la parte demandante agotó las gestiones notificadorias a través de medios electrónicos, la revisión de dicha actuación y las subsiguientes a esta, debía efectuarse desde lo previsto en el Decreto 806 de 2020, es decir, teniendo en cuenta que la notificación se entendería surtida transcurridos dos (2) días después del envío del mensaje de datos y la prueba del acuse de recibo, así como el término de traslado con el que contaba la demandada para contestar el gestor, que por disposición del artículo 74 CPLSS es de diez (10) días.

Aplicado entonces lo anterior al litigio en cuestión, se encuentra que la parte demandante remitió la notificación utilizando las tecnologías de la información, con destino al correo electrónico de la entidad, el 18 de junio de 2021, diligencia que cuenta con el acuse de recibo respectivo en la misma calenda (Archivo 04 ED), por lo que el término de traslado para que **EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP – EPM** vencía el 7 de julio de 2021, y al haber arrimado la réplica correspondiente el 8 de julio de 2021, es claro que el escrito de contestación fue extemporáneo.

Bajo el panorama descrito, para la Sala no existe reparo en el hecho puntual de que el Juez dispusiera oficiosamente sanear el proceso, como quiera que esta determinación, se entiende, fue asumida en el marco de las facultades de control de legalidad que el artículo 132 CGP el cual precisa que el Juzgador deberá “(...) *realizar control de legalidad para corregir o sanear los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades del proceso* (...)”; sin embargo, lo que resulta improcedente es que hubiere reemplazado la decisión de tener por no contestada la demanda, a partir de una revisión en el conteo de términos que no se compadece con la realidad procesal delimitada por las normas adjetivas que regentan en la actualidad el trámite de notificación.

Tal desatención, si bien no configura una de las causales de nulidad enlistadas en el artículo 133 CGP, si denota una falta al debido proceso (Art. 29 CGP), en la medida que, además de transgredir las normas del procedimiento, las cuales, recuérdese, son de orden público e imperativo cumplimiento (Art. 13 CGP), se erige como una afrenta a las garantías de la PARTE DEMANDANTE de cara a las consecuencias que devienen de la posición de extemporaneidad expelida por **EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP – EPM**, sin que sea dable dejar de lado su posible incidencia a la hora de resolver las pretensiones de la demanda, argumentos todos que conducen a concluir en la vulneración al procedimiento laboral, lo que obliga, en sentir de la Sala, a revocar la decisión de rechazar la nulidad propuesta, y en su lugar, declarar la nulidad de lo actuado a partir del auto que dispuso sanear el proceso y tener por contestada la demanda por parte de la citada entidad, dejando en firme el Auto No. 146 del 17 de abril de 2022 que, entre otras cosas, tuvo por no contestada la demanda por cuenta de esa accionada.

Sin costas en esta instancia por no aparecer causadas.

Sin que sean necesarias más consideraciones, la **SALA TERCERA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR el *Auto del 2 de marzo de 2023*, proferido por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, a través del cual rechazó la nulidad propuesta por la parte demandante.

En su lugar se dispondrá:


DECLARAR la nulidad procesal de lo actuado a partir del Auto de la misma fecha, mediante el que decidió sanear el proceso y tener por contestada la demanda de parte de **EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP – EPM**.

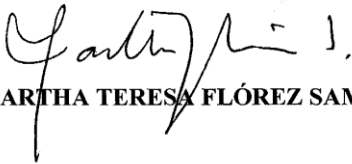
En consonancia **SE DISPONE, DEJAR EN FIRME** el *Auto N° 146 del 17 de abril de 2022* que, entre otras cosas, **tuvo por no contestada la demanda por cuenta de esa accionada**.

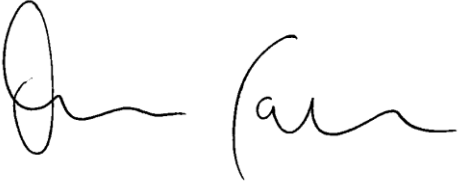
SEGUNDO: Sin **COSTAS** en esta instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,


MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN –
SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por estados N ° 093 del 01
de junio de 2023

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>